

No. 55947*

**Spain
and
Peru**

**Agreement on social security between the Kingdom of Spain and the Republic of Peru.
Madrid, 16 June 2003**

Entry into force: *1 February 2005, in accordance with article 41*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Spain, 26 September 2019*

Note: *See also annex A, No. 55947.*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Espagne
et
Pérou**

**Accord sur la sécurité sociale entre le Royaume d'Espagne et la République du Pérou.
Madrid, 16 juin 2003**

Entrée en vigueur : *1^{er} février 2005, conformément à l'article 41*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Espagne,
26 septembre 2019*

Note : *Voir aussi annexe A, No. 55947.*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO
DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y
LA REPÚBLICA DEL PERU

El Reino de España y la República del Perú, en adelante Partes Contratantes,

Decididos a cooperar en el ámbito de la Seguridad Social,

Considerando la importancia de asegurar a los trabajadores de cada uno de los dos Estados que ejerzan o hayan ejercido una actividad profesional en el otro, una mejor garantía de sus derechos,

Reconociendo los lazos de amistad que unen a los dos Estados,

Han decidido concluir este Convenio acordando lo siguiente:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Definiciones

1. Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen, a efectos de aplicación del presente Convenio, el siguiente significado:
 - a) "Legislación": las leyes, reglamentos y demás disposiciones de Seguridad Social a que se refiere el artículo 2, vigentes en el territorio de cada una de las Partes Contratantes.
 - b) "Autoridad Competente":
 - en lo que se refiere a España, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales;
 - en lo que se refiere a la República del Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Economía y Finanzas.
 - c) "Institución": Organismo o Autoridad responsable de la aplicación de la legislación a que se refiere el artículo 2.
 - d) "Institución Competente": Institución responsable, de acuerdo con la legislación de cada una de las Partes Contratantes del reconocimiento del derecho y del abono de las prestaciones o, en su caso, alternativamente de la administración y aplicación de uno o más regímenes de la Seguridad Social.
 - e) "Organismo de enlace": Organismo de coordinación e información entre las Instituciones de ambas Partes Contratantes que intervenga en la aplicación del Convenio, y en la información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo.

- f) “Trabajador”: toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por cuenta ajena o propia, está, o ha estado sujeta, a las legislaciones enumeradas en el artículo 2.
- g) “Pensionista”: toda persona que, en virtud de la legislación de una o de ambas Partes Contratantes, reciba pensión.
- h) “Miembros de la familia y derechohabientes”: las personas reconocidas como tales por la legislación aplicable de cada una de las Partes Contratantes.
- i) “Residencia”: la estancia habitual legalmente establecida.
- j) “Estancia”: la estancia temporal.
- k) "Período de Seguro": los períodos de cotización obligatorios o voluntarios tales como se definen o admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido cubiertos o se consideran como cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de seguro.
- l) “Prestación de Asistencia Sanitaria”: la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud en casos de enfermedad común o profesional, maternidad o accidente, cualquiera que sea su causa.
- m) "Prestación económica" y "Pensión": todas las prestaciones en dinero y pensiones previstas en la legislación que de acuerdo con el artículo 2, quedan incluidas en este Convenio, así como las mejoras por revalorización, complementos o suplementos de las mismas.
- n) “Prestaciones Familiares”: prestaciones en dinero de pago periódico que se conceden, en su caso, dependiendo del número de hijos, de su edad, de la condición de minusvalía de alguno de ellos o de los ingresos familiares.

- o) “Emergencia Médica”: la situación en que la prestación de asistencia sanitaria no pueda ser diferida sin que se ponga o se pueda poner en grave peligro la vida o la salud del interesado.
 - p) “Sistema Privado de Pensiones”: Sistema de Seguridad Social peruano de cotizaciones definidas basado en principios de capitalización individual, administración privada, supervisión estatal y cuyos beneficios están vinculados a las aportaciones realizadas por el afiliado. Los beneficios son los de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.
2. Los demás términos o expresiones utilizados en el Convenio tienen el significado que les atribuye la legislación que se aplica.

Artículo 2

Campo de aplicación objetivo

1. El presente Convenio se aplicará:
- A) Por parte del Perú:
 - a) A la legislación relativa al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud y de otros regímenes de Seguridad Social en lo que se refiere a prestaciones sanitarias y económicas.
 - b) A la legislación relativa al Sistema Nacional de Pensiones, así como a sus regímenes especiales en lo referente a prestaciones económicas de invalidez, jubilación y sobrevivencia.
 - c) A la legislación relativa al Sistema Privado de Pensiones, en lo referente a las prestaciones económicas de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

B) Por parte de España:

A la legislación relativa a las prestaciones contributivas del Sistema español de Seguridad Social, con excepción de los regímenes de funcionarios públicos, civiles y militares, en lo que se refiere a

- a) Asistencia sanitaria, en los casos de enfermedad común o profesional, accidente sea o no de trabajo y maternidad.
 - b) Incapacidad temporal en los casos de enfermedad común y accidente no laboral .
 - c) Maternidad y Riesgo durante el embarazo.
 - d) Incapacidad Permanente, Jubilación y Supervivencia.
 - e) Prestaciones familiares por hijo a cargo.
 - f) Prestaciones económicas derivadas de Accidente de trabajo, y enfermedad profesional.
 - g) Subsidio de defunción.
2. El presente Convenio se aplicará igualmente a la legislación que en el futuro complete o modifique la enumerada en el apartado precedente.
 3. El Convenio se aplicará a la legislación que en una Parte Contratante extienda la normativa vigente a nuevos grupos de personas, siempre que la Autoridad Competente de la otra Parte no se oponga a ello dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la notificación de dichas disposiciones.
 4. El presente Convenio se aplicará a la legislación que establezca un nuevo Régimen Especial de Seguridad Social o una nueva rama cuando las Partes Contratantes así lo acuerden.

Artículo 3

Campo de aplicación subjetivo

El presente Convenio será de aplicación a los trabajadores y pensionistas que estén o hayan estado sujetos a las legislaciones enumeradas en el artículo 2, en una o ambas Partes Contratantes, así como a los miembros de sus familias y derechohabientes.

Artículo 4

Igualdad de trato

Los nacionales de una Parte Contratante y los miembros de su familia estarán sometidos y se beneficiarán de la Seguridad Social en el territorio de la otra Parte en las mismas condiciones que los nacionales de la misma, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en este Convenio.

Artículo 5

Totalización de periodos

1. Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y económicas de carácter contributivo al cumplimiento de determinados períodos de seguro, la Institución Competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de seguro cumplidos con arreglo a la legislación de la otra Parte Contratante, como si se tratara de períodos cumplidos con arreglo a la legislación de la primera Parte, siempre que no se superpongan.

2. Cuando deba llevarse a cabo la totalización de períodos de seguro cumplidos en ambas Partes Contratantes para el reconocimiento del derecho a las prestaciones, se aplicarán las siguientes reglas:
 - a) Cuando coincida un período de seguro obligatorio con un período de seguro voluntario o equivalente se tendrá en cuenta el período de seguro obligatorio.
 - b) Cuando coincidan dos periodos de seguro voluntario acreditados en ambas Partes Contratantes, cada Parte tendrá en cuenta los periodos de seguro voluntarios cumplidos en su territorio.
 - c) Cuando coincida un periodo de seguro voluntario acreditado en una Parte Contratante, con un periodo de seguro equivalente, acreditado en la otra Parte, se tendrá en cuenta el periodo de seguro voluntario.
 - d) Cuando en una Parte Contratante no sea posible precisar la época en que determinados períodos de seguro hayan sido cumplidos, se presumirá que dichos períodos no se superponen con los períodos de seguro cumplidos en la otra Parte.
3. Si se exigen períodos de seguro para la admisión al seguro voluntario o continuación facultativa del seguro, los períodos de seguro cubiertos por el trabajador en virtud de la legislación de una Parte Contratante, se totalizarán, si fuera necesario, con los períodos de seguro cubiertos en virtud de la legislación de la otra Parte, siempre que no se superpongan.

Artículo 6

Pago de prestaciones económicas en el extranjero

1. Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, las prestaciones económicas no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra Parte Contratante y se le harán efectivas en el mismo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a las prestaciones económicas de incapacidad temporal.
3. Las pensiones reconocidas en base a este Convenio a los interesados que residan en un tercer país se harán efectivas, teniendo en cuenta los apartados anteriores, en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer país, siempre que la legislación de este país así lo permita.

TITULO II

DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACION APLICABLE

Artículo 7

Norma general

Los trabajadores a quienes sea aplicable el presente Convenio, estarán sujetos exclusivamente a la legislación de Seguridad Social de la Parte Contratante en cuyo territorio ejerzan la actividad laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.

Artículo 8

Normas particulares y excepciones

1. Respecto a lo dispuesto en el artículo 7, se establecen las siguientes normas particulares y excepciones:
 - a) El trabajador asalariado al servicio de una Empresa cuya sede se encuentre en el territorio de una de las Partes Contratantes y sea enviado por dicha Empresa al territorio de la otra Parte para realizar trabajos de carácter temporal, quedará sometido en su totalidad a la legislación de la primera Parte, siempre que la duración previsible del trabajo para el que ha sido desplazado no

exceda de dos años, ni haya sido enviado en sustitución de otro trabajador cuyo periodo de desplazamiento haya concluido.

- b) Si, por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo a que se refiere el apartado anterior excediera de los dos años, el trabajador continuará sometido a la legislación de la primera Parte Contratante por un nuevo período, no superior a un año, a condición de que la Autoridad Competente de la segunda Parte u organismo en quien delegue dé su conformidad.
- c) El trabajador por cuenta propia que ejerza normalmente su actividad en el territorio de una Parte Contratante en la que esta asegurado y que pase a realizar un trabajo de la misma naturaleza en el territorio de la otra Parte, continuará sometido en su totalidad a la legislación de la primera Parte, a condición de que la duración previsible del trabajo no exceda de dos años.
- d) Si, por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo a que se refiere el apartado anterior excediera de los dos años, el trabajador continuará sometido a la legislación de la primera Parte Contratante por un nuevo período, no superior a un año, a condición de que la Autoridad Competente de la segunda Parte u organismo en quien delegue dé su conformidad.
- e) El personal itinerante al servicio de empresas de transporte aéreo que desempeñe su actividad en el territorio de ambas Partes Contratantes, estará sujeto a la legislación de la Parte en cuyo territorio tenga su sede la empresa.
- f) El trabajador asalariado que ejerza su actividad a bordo de un buque estará sometido a la legislación de la Parte Contratante cuya bandera enarbole el buque.

No obstante lo anterior, cuando el trabajador sea remunerado por esa actividad por una empresa o una persona que tenga su domicilio en el territorio de la otra Parte Contratante, deberá quedar sometido a la legislación de esta Parte Contratante, si reside en su territorio. La empresa o persona que pague la retribución será considerada como empresario para la aplicación de dicha legislación.

- g) Los trabajadores nacionales de una Parte Contratante y con residencia en la misma que presten servicios en una empresa pesquera mixta constituida en la otra Parte Contratante y en un buque abanderado en esa Parte Contratante, se considerarán trabajadores de la empresa participante del país del que son nacionales y en el que residen y, por tanto, quedarán sujetos a la legislación de esta Parte Contratante, debiendo la citada empresa asumir sus obligaciones como empresario.
- h) Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga, reparación de buques, y servicios de vigilancia en el puerto, estarán sometidos a la legislación de la Parte Contratante a cuyo territorio pertenezca el puerto.
- i) Los miembros de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares y el personal al servicio privado de los mismos, se regirán por lo establecido en el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961 y en el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación:

El personal administrativo y técnico y los miembros del personal de servicio de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares de cada una de las Partes, así como el personal al servicio privado de los miembros de aquéllas, podrán optar entre la aplicación de la legislación de cualquiera de las Partes Contratantes siempre que sean nacionales del Estado de envío o hayan estado sujetos a su legislación.

La opción se ejercerá dentro de los tres primeros meses a partir de la entrada en vigor del presente Convenio o, según el caso, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio del Estado receptor.

- j) Los funcionarios públicos de una Parte Contratante distintos a los que se refiere la letra i), que se hallen destinados en el territorio de la otra Parte, quedarán sometidos a la legislación de la Parte a la que pertenece la Administración de la que dependen.

- k) Las personas enviadas por una de las Partes Contratantes en misiones de cooperación, al territorio de la otra Parte, quedarán sometidas a la Seguridad Social de la Parte que las envía, salvo que en los acuerdos de cooperación se disponga otra cosa.
2. Las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes o los Organismos designados por ellas podrán, de común acuerdo, establecer otras excepciones o modificar las previstas en los apartados anteriores.

TITULO III

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS PRESTACIONES

CAPITULO 1

Prestaciones de asistencia sanitaria por maternidad, enfermedad y accidente

Artículo 9

Prestaciones de asistencia sanitaria en casos de estancia temporal

1. El trabajador o el pensionista, que reúna las condiciones exigidas por la legislación de una Parte Contratante para tener derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria, y cuyo estado de salud las requiera en caso de emergencia médica, cuando se encuentren temporalmente en el territorio de la otra Parte, se beneficiarán de dichas prestaciones, siempre que sean nacionales de esta última Parte.

Las prestaciones le serán servidas por la Institución del país en que se encuentren de conformidad con las modalidades y contenidos de su legislación y con cargo a la Institución Competente de la otra Parte Contratante.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también aplicable a los miembros de la familia y derechohabientes del trabajador o del pensionista que le acompañen y que tengan derecho a la asistencia sanitaria, de acuerdo con la legislación que les sea aplicable.

Artículo 10

Reintegro de los gastos de asistencia sanitaria.

1. Los gastos ocasionados en virtud de las prestaciones de asistencia sanitaria concedidas por la Institución de una Parte Contratante por cuenta de la Institución Competente de la otra Parte, serán reembolsados en base a gastos reales según el procedimiento que se determine en el Acuerdo Administrativo previsto en el artículo 29 del presente Convenio.
2. En el caso de pensionistas con derecho a prestaciones sanitarias, el costo de dichas prestaciones se liquidará, según los casos, en la forma siguiente:
 - a) Cuando la pensión está a cargo de la Seguridad Social de una de las Partes Contratantes, la prestación sanitaria estará a cargo de la Parte deudora de la pensión.
 - b) Cuando se haya concedido pensión por las dos Partes Contratantes, la prestación estará, exclusivamente, a cargo de la Institución Competente del lugar de residencia del pensionista.

Artículo 11

Ampliación de las prestaciones de asistencia sanitaria

Las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes, de común acuerdo, podrán extender las prestaciones de asistencia sanitaria a nuevas situaciones o colectivos de personas.

CAPITULO 2

Prestaciones económicas por incapacidad temporal, maternidad, lactancia y riesgo durante el embarazo

Artículo 12

Reconocimiento del derecho

Las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, y las prestaciones económicas por maternidad, lactancia y riesgo durante el embarazo serán concedidas por la Institución Competente de la Parte Contratante cuya legislación sea aplicable al trabajador conforme a los artículos 7 y 8 del presente Convenio y de acuerdo con la misma.

CAPITULO 3

Prestaciones económicas por incapacidad permanente, jubilación y supervivencia

Sección 1ª

Disposiciones comunes

Artículo 13

Determinación del derecho y cálculo de las prestaciones económicas

El trabajador que haya estado sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante, causará derecho a las prestaciones económicas reguladas en este Capítulo en las condiciones siguientes:

1. La Institución Competente de cada Parte Contratante determinará el derecho y calculará la prestación económica, teniendo en cuenta únicamente los periodos de seguro acreditados en esa Parte Contratante.

2. Asimismo la Institución Competente de cada Parte Contratante determinará los derechos a las prestaciones económicas totalizando los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de ambas Partes Contratantes. Cuando efectuada la totalización se alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de la cuantía a pagar, se aplicarán las reglas siguientes:
 - a) Se determinará la cuantía de la prestación económica a la cual el interesado hubiera tenido derecho, como si todos los periodos de seguro totalizados hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica).
 - b) El importe de la prestación económica se establecerá aplicando a la pensión teórica la misma proporción existente entre el periodo de seguro cumplido en esa Parte Contratante y la totalidad de los periodos de seguro cumplidos en ambas Partes Contratantes (pensión prorata temporis).
 - c) Si la legislación de alguna de las Partes Contratantes exige una duración máxima de periodos de seguro para el reconocimiento de una pensión completa, la Institución Competente de esa Parte tomará en cuenta, para el cálculo de la pensión, solamente los periodos de seguro de la otra Parte que sean necesarios para alcanzar dicha pensión completa. Lo dispuesto anteriormente no será válido para las prestaciones económicas cuya cuantía no está en función de los periodos de seguro.
3. Determinados los derechos conforme se establece en los párrafos 1 y 2 precedentes, la Institución Competente de cada Parte Contratante reconocerá y abonará la prestación económica que sea más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada por la Institución Competente de la otra Parte Contratante.

Artículo 14

Cuantías debidas en virtud de periodos de seguro voluntario

Para calcular tanto la pensión teórica como el importe efectivo de la prestación económica con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 5.

La cuantía efectivamente debida, calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13, se aumentará en la cuantía que corresponda a los períodos de seguro voluntario que no hayan sido computados con arreglo a lo dispuesto en la letra a), apartado 2 del artículo 5. Este aumento se calculará según lo dispuesto por la legislación de la Parte Contratante, con arreglo a la cual se hayan cumplido los períodos de seguro voluntario.

Artículo 15

Períodos de seguro inferiores a un año

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, cuando la duración total de los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de una Parte Contratante no llega a un año y, con arreglo a la legislación de esa Parte no se adquiera derecho a prestaciones económicas, la Institución de dicha Parte, no reconocerá prestación económica alguna por el referido periodo.

Los periodos citados se tendrán en cuenta, si fuera necesario, por la Institución de la otra Parte Contratante para el reconocimiento del derecho y determinación de la cuantía de la pensión según su propia legislación, pero ésta no aplicará lo establecido en el apartado 2 b) del artículo 13.

2. A pesar de lo establecido en el párrafo anterior, los periodos inferiores a un año acreditados bajo la legislación de ambas Partes Contratantes podrán ser totalizados por aquélla Parte en la que el interesado reúne los requisitos para acceder a la prestación económica. De tener derecho a la misma en ambas Partes, ésta solo se reconocería por aquélla en la que el trabajador acredite las últimas cotizaciones. En estos supuestos no sería de aplicación para la liquidación de la pensión lo dispuesto en el apartado 2, b) del artículo 13.

Artículo 16

Condiciones específicas para el reconocimiento del
derecho a las prestaciones económicas

1. Si la legislación de una Parte Contratante subordina la concesión de las prestaciones económicas reguladas en este Capítulo a la condición de que el trabajador haya estado sujeto a su legislación en el momento de producirse el hecho causante de la prestación, esta condición se considerará cumplida si en dicho momento el trabajador está asegurado en virtud de la legislación de la otra Parte Contratante o, en su defecto, cuando reciba una prestación económica de esa Parte, basada en sus propios periodos de seguro.

Para el reconocimiento de las pensiones de supervivencia, si es necesario se tendrá en consideración si el sujeto causante estaba en alta o era pensionista de acuerdo con la legislación de la otra Parte.

2. Si la legislación de una Parte Contratante exige para reconocer la prestación económica que se hayan cumplido períodos de cotización en un tiempo determinado inmediatamente anterior al hecho causante de la prestación, esta condición se considerará cumplida si éstos se acreditan en el período inmediatamente anterior al reconocimiento de las prestaciones económicas en la otra Parte.
3. Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la legislación de una de las Partes Contratantes en el caso de pensionistas que ejerzan una actividad laboral, les serán aplicables aunque ejerzan ésta en el territorio de la otra Parte Contratante.

Artículo 17

Cómputo de períodos de cotización en Regímenes Especiales o en determinadas profesiones

Si la legislación de una de las Partes Contratantes condiciona el derecho a prestaciones económicas o la concesión de determinados beneficios al cumplimiento de períodos de seguro en una profesión sometida a un Régimen Especial o, en una profesión o empleo determinado, los períodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte sólo se tendrán en cuenta, para la concesión de tales prestaciones o beneficios, si hubieran sido acreditados al amparo de un régimen de igual naturaleza, ó a falta de éste, en la misma profesión o, dado el caso, en un empleo similar.

Si teniendo en cuenta los períodos así cumplidos el interesado no satisface las condiciones requeridas para beneficiarse de una prestación económica de un Régimen Especial, estos períodos serán tenidos en cuenta para la concesión de prestaciones económicas del Régimen General o de otro Régimen Especial en el que el interesado pudiera acreditar derecho.

Artículo 18

Determinación del grado de incapacidad

1. Para la determinación de la disminución de la capacidad de trabajo a efectos de la concesión de las correspondientes prestaciones económicas de incapacidad, la Institución Competente de cada una de las Partes Contratantes efectuará su evaluación de acuerdo con la legislación que aplique.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior las Instituciones Competentes de cada una de las Partes Contratantes tendrán en cuenta los informes médicos y los datos administrativos emitidos por las Instituciones de la otra Parte. No obstante, cada Institución podrá someter al asegurado a reconocimiento por médicos elegidos por dicha Institución y a cargo de la misma.

Sección 2ª

Aplicación de la legislación española

Artículo 19

Base reguladora de las prestaciones económicas

1. Para establecer la base reguladora de las prestaciones económicas, la Institución Competente tomará en cuenta únicamente los periodos de seguro cumplidos de conformidad con su legislación.
2. Para determinar la base reguladora de las prestaciones económicas, cuando sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, se aplicarán las siguientes normas:
 - a) El cálculo de la pensión teórica española se efectuará sobre las bases de cotización reales del asegurado en España, durante los años inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a la Seguridad Social española.
 - b) La cuantía de la pensión se incrementará con arreglo al importe de los aumentos y revalorizaciones calculados para cada año posterior para las pensiones de la misma naturaleza.

Sección 3ª

Aplicación de la legislación de la República del Perú

Artículo 20

Base reguladora de las prestaciones económicas

1. Para establecer la base reguladora de las prestaciones económicas, la Institución Competente tomará en cuenta únicamente los periodos de seguro cumplidos de conformidad con su legislación.

2. Para determinar la base reguladora de las prestaciones económicas, cuando sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 apartado 2, se aplicarán las siguientes normas:
 - a) El cálculo de la pensión teórica peruana se efectuará sobre las bases de cotización del asegurado en el Perú, durante los años inmediatamente anteriores a la última cotización a la Seguridad Social peruana.
 - b) La cuantía de la prestación económica se incrementará con arreglo al importe de los aumentos para las pensiones de la misma naturaleza.

Artículo 21

Sistema Privado de Pensiones

1. Los afiliados a una Administradora Privada de Fondos de Pensiones del Perú, financiarán sus pensiones jubilatorias con el saldo acumulado en su cuenta individual de capitalización que, de ser el caso, incluye el Bono de Reconocimiento, el mismo que se otorgará en las condiciones que se establezcan en las disposiciones legales peruanas.
2. No obstante lo anterior, cuando dicha cuenta no permita financiar un beneficio jubilatorio equivalente a un monto de pensión predeterminada y establecida por la legislación peruana, ésta será garantizada por el Estado, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 del presente Convenio.
3. En el caso de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, la pensión o beneficio, según corresponda, será igualmente financiado con el saldo acumulado en su cuenta individual de capitalización, en el marco de modelo de administración de riesgos que resulte aplicable, acorde a la legislación peruana.

4. Para efectos de determinar las condiciones y requisitos para el reconocimiento y materialización de los precitados beneficios, resultarán de aplicación las disposiciones legales peruanas.

CAPITULO 4

Prestaciones familiares por hijo a cargo

Artículo 22

Reconocimiento del derecho a las prestaciones familiares por hijo a cargo

1. El trabajador asegurado en virtud de la legislación de una Parte Contratante o el titular de una pensión de una de las Partes Contratantes, tendrá derecho, para los miembros de su familia que residan en territorio de la otra Parte, a las prestaciones familiares previstas en la legislación de la Parte en que se halle asegurado o de la que perciba la pensión, como si los familiares residieran en el territorio de la misma.
2. En el caso de que se cause derecho a las prestaciones durante el mismo período y para el mismo miembro de la familia, según la legislación de ambas Partes Contratantes, será competente la Parte en la que esté asegurado el trabajador o la que en virtud de cuya legislación se abone una pensión.
3. Si pese a lo dispuesto en el apartado anterior existiera todavía concurrencia de derechos, las prestaciones serán abonadas únicamente por la Parte Contratante en cuyo territorio residen los miembros de la familia.

CAPITULO 5

Prestaciones económicas por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional

Artículo 23

Determinación del derecho a prestaciones económicas

El derecho a las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será determinado de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante a la que el trabajador se hallase sujeto en la fecha de producirse el accidente o de contraerse la enfermedad.

Artículo 24

Agravación de las secuelas de un accidente de trabajo

Si el trabajador, víctima de un accidente de trabajo, sufre una agravación de las secuelas del accidente, estando sujeto a la legislación de la otra Parte, las prestaciones económicas que puedan corresponderle por esta agravación serán a cargo de la Institución Competente de la Parte Contratante en la que el trabajador se hallaba asegurado en el momento de producirse el accidente de trabajo.

Artículo 25

Enfermedad profesional

1. Las prestaciones económicas por enfermedad profesional se regularán de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante que fuera aplicable al trabajador durante el tiempo que estuvo ejerciendo la actividad sujeta a riesgo de enfermedad profesional, aun cuando ésta se haya diagnosticado por primera vez estando sujeto el trabajador a la legislación de la otra Parte.

2. Cuando el trabajador haya realizado sucesiva o alternativamente dicha actividad, estando sujeto a la legislación de una y otra Parte Contratante, sus derechos serán determinados de acuerdo con la legislación de la Parte a la que esté o haya estado sujeto en último lugar por razón de dicha actividad. Si no alcanzara derecho a prestaciones económicas en esa Parte, sería de aplicación lo dispuesto en la legislación de la primera.

Artículo 26

Agravación de la enfermedad profesional

1. En caso de que una enfermedad profesional haya originado la concesión de prestaciones económicas por una de las Partes Contratantes, ésta responderá de cualquier agravación de la enfermedad que pueda tener lugar aún cuando se halle sujeto a la legislación de la otra Parte, siempre que el trabajador no haya realizado una actividad con el mismo riesgo, estando sujeto a la legislación de esta última Parte.
2. Si, después de haber sido reconocida una pensión de incapacidad permanente por enfermedad profesional por la Institución de una Parte Contratante, el interesado ejerce una actividad susceptible de agravar la enfermedad profesional que padece, estando sujeto a la legislación de la otra Parte, la Institución Competente de la primera Parte continuará abonando la pensión que tenía reconocida sin tener en cuenta la agravación y con arreglo a lo dispuesto en su legislación. La Institución Competente de la segunda Parte, a cuya legislación ha estado sujeto el interesado mientras se producía la agravación, le concederá una prestación económica cuya cuantía será igual a la diferencia que exista entre la cuantía de la prestación económica a que el interesado tenga derecho después de la agravación y la cuantía de la prestación económica a la que hubiera tenido derecho en esa Parte, antes de la agravación.

Artículo 27

Consideración de secuelas por anteriores accidentes de trabajo o enfermedades profesionales

Para valorar la disminución de la capacidad derivada de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, se tendrán en cuenta las secuelas de anteriores accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que pudiera haber sufrido el trabajador, aunque éstos se hubieran producido estando sujeto a la legislación de la otra Parte Contratante.

CAPITULO VI

Prestaciones económicas por sepelio o defunción

Artículo 28

Asignaciones por sepelio o subsidio por defunción

La asignación por sepelio o subsidio por defunción se regirán por la legislación que fuera aplicable al trabajador en la fecha del fallecimiento.

1. En los casos de pensionistas que tuvieran derecho a prestaciones económicas por aplicación de las legislaciones de ambas Partes Contratantes, el reconocimiento de aquella se regulará por la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio residía el asegurado.
2. Si la residencia del pensionista fuera en un tercer país, la legislación aplicable, en el caso de que tuviera derecho a prestaciones económicas en ambas Partes Contratantes, sería la de la Parte Contratante donde figuró asegurado por última vez.

TITULO IV

DISPOSICIONES DIVERSAS, TRANSITORIAS Y FINALES

CAPITULO 1

Disposiciones diversas

Artículo 29

Atribuciones y obligaciones de las Autoridades Competentes

1. Se faculta a las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes para establecer el Acuerdo Administrativo necesario para la aplicación del presente Convenio.
2. Las Autoridades Competentes de ambas Partes deberán:
 - a) Designar los respectivos Organismos de Enlace.
 - b) Comunicar las medidas adoptadas en el plano interno para la aplicación de este Convenio.
 - c) Notificar todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen las que se mencionan en el artículo 2.
 - d) Prestar sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y administrativa posible para la aplicación de este Convenio.
 - e) Interpretar las disposiciones del Convenio que puedan plantear dudas a sus Instituciones competentes.
3. Podrá reunirse una Comisión mixta presidida por las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes, a petición de cualquiera de ellas, con la finalidad de examinar los problemas que puedan surgir en la aplicación de este Convenio y del Acuerdo administrativo.

Artículo 30

Instituciones Competentes peruanas del sector privado o que se sujeten a reglas de derecho privado

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio que involucren a las entidades previsionales de capitalización individual, Instituciones Competentes del sector privado o que se sujeten a reglas de derecho privado, se regularán específicamente en el Acuerdo Administrativo previsto en el artículo 29 de este Convenio.

Artículo 31

Presentación de documentos

1. Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que, a efectos de aplicación de la legislación de una Parte Contratante, deban ser presentados en un plazo determinado ante las Autoridades o Instituciones correspondientes de esa Parte, se considerarán como presentados ante ellas si lo hubieran sido dentro del mismo plazo ante las Autoridades o Instituciones correspondientes de la otra Parte.
2. Cualquier solicitud de prestación económica presentada según la legislación de una Parte Contratante será considerada como solicitud de la prestación correspondiente según la legislación de la otra Parte, siempre que el interesado manifieste expresamente o se deduzca de la documentación presentada, que ha ejercido una actividad laboral o ha estado asegurado en el territorio de dicha Parte.

Artículo 32

Ayuda administrativa entre Instituciones

1. Las Instituciones Competentes de ambas Partes Contratantes podrán solicitarse, en cualquier momento, reconocimientos médicos, comprobaciones de hechos y actos de los que pueden derivarse la adquisición, modificación, suspensión, supresión, extinción o mantenimiento del derecho a prestaciones por ellas reconocido. Los gastos que en consecuencia se produzcan serán reintegrados, sin demora, por la Institución Competente que solicitó el reconocimiento o la comprobación, cuando se reciban los documentos justificativos de tales gastos.
2. La Institución Competente de una de las Partes Contratantes que, al liquidar o revisar una prestación económica de acuerdo con lo dispuesto en el Título III de este Convenio, compruebe que ha pagado al beneficiario de prestaciones económicas una cantidad superior a la debida, podrá solicitar de la Institución Competente de la otra Parte que deba prestaciones económicas de igual naturaleza al mismo beneficiario, la retención sobre el primer pago de los atrasos correspondientes a los abonos periódicos de la cantidad pagada en exceso, dentro de los límites establecidos por la legislación interna de la Parte que realice la retención. Esta última Institución transferirá la suma retenida a la Institución acreedora.

Artículo 33

Exenciones en actos y documentos administrativos

1. Las exenciones de derechos de registro, de escritura, de timbre y de tasas consulares u otros análogos, previstas en la legislación de cada una de las Partes Contratantes, se extenderá a los certificados y documentos que se expidan por las Administraciones o Instituciones Competentes de la otra Parte en aplicación del presente Convenio.

2. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan para la aplicación del presente Convenio serán dispensados de los requisitos de legalización.

Artículo 34

Actualización o revalorización de las prestaciones económicas

Las prestaciones económicas reconocidas por aplicación de las normas del Título III de este Convenio se actualizarán o revalorizarán de acuerdo con la legislación interna de cada una de las Partes Contratantes y teniendo en cuenta las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 35

Modalidades y garantía del pago de las prestaciones económicas

1. Las Instituciones Competentes de cada una de las Partes Contratantes quedarán liberadas de los pagos que se realicen en aplicación del presente Convenio, cuando éstos se efectúen en la moneda de curso legal de su país.
2. Si se promulgasen en alguna de las Partes Contratantes disposiciones que restrinjan la transferencia de divisas, ambas Partes adoptarán de inmediato las medidas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos derivados del presente Convenio.

Artículo 36

Regulación de las controversias

1. Las Autoridades Competentes deberán resolver mediante negociaciones las eventuales controversias y las diferencias de interpretación del presente Convenio y de su Acuerdo Administrativo.

2. Si las controversias no pudieran ser resueltas mediante negociación en un plazo de seis meses a partir del comienzo de la misma, éstas deberán ser sometidas a una comisión arbitral, cuya composición y procedimiento serán fijados de común acuerdo entre las Partes contratantes. La decisión de la comisión arbitral será obligatoria y definitiva.

CAPITULO 2

Disposiciones transitorias

Artículo 37

Cómputo de periodos anteriores a la vigencia del Convenio

Los períodos de seguro cumplidos de acuerdo con la legislación de cada una de las Partes Contratantes, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, serán tomados en consideración para la determinación del derecho y la cuantía de las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo.

Artículo 38

Hechos causantes anteriores a la vigencia del Convenio

1. La aplicación de este Convenio otorgará derecho a prestaciones económicas por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, el abono de las mismas no se efectuaría en ningún caso por periodos anteriores a su vigencia.
2. Las pensiones que hayan sido liquidadas por una o ambas Partes Contratantes o los derechos a pensiones que hayan sido denegados antes de la entrada en vigor de este Convenio, podrán ser revisados al amparo del mismo y de acuerdo con el procedimiento legal establecido en cada Parte, a petición de los interesados. El derecho se adquirirá desde la fecha de la solicitud, salvo disposición más favorable de la legislación de esa Parte.

No se revisarán las prestaciones económicas abonadas que hayan consistido en una cantidad única.

CAPITULO 3

Disposiciones finales

Artículo 39

Vigencia del Convenio

1. El presente Convenio se establece por tiempo indefinido, pudiendo ser denunciado total o parcialmente por cualquiera de las Partes Contratantes mediante notificación a la otra. En este caso cesará su vigencia después de seis meses desde la entrega de dicha notificación.
2. En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio seguirán siendo aplicables a los derechos adquiridos al amparo del mismo. Asimismo, las Partes Contratantes acordarán las medidas que garanticen los derechos en curso de adquisición derivados de los períodos de seguro cumplidos con anterioridad a la fecha del cese de vigencia del Convenio.

Artículo 40

Término del Convenio y Acuerdo Administrativo entre Perú y España

A la entrada en vigor del presente Convenio, queda sin efecto el Convenio Concertado entre los Gobiernos del Perú y España sobre Seguridad Social firmado el 24 de julio de 1964 y el Acuerdo Administrativo Peruano Hispano de Seguridad Social, suscrito entre el Gobierno del Perú y el Reino de España el 24 de noviembre de 1978 y su Acuerdo Complementario.

El presente Convenio garantiza los derechos adquiridos al amparo del Convenio de 24 de julio de 1964 y del Acuerdo Administrativo de 24 de noviembre de 1978 y su Acuerdo Complementario.

Artículo 41

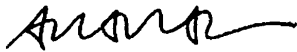
Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al mes en que cada Parte Contratante haya recibido de la otra Parte notificación escrita de que se han cumplido todos los requisitos reglamentarios y constitucionales para la entrada en vigor del Convenio.

En fe de lo cual, los representantes autorizados de ambas Partes Contratantes, firman el presente Convenio.

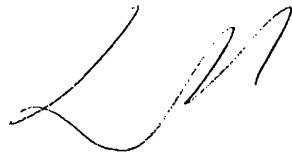
Hecho en Madrid el 16 de junio de 2003 en dos ejemplares en lengua española, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL REINO DE ESPAÑA
“a.r.”



Ana Palacio
Ministra de Asuntos Exteriores

POR LA REPUBLICA DEL PERU



Allan Wagner
Ministro de Relaciones Exteriores

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN
AND THE REPUBLIC OF PERU

The Kingdom of Spain and the Republic of Peru, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,

Determined to cooperate in the area of social security,

Recognizing the importance of ensuring that workers of each of the two States who have engaged in or are engaged in a professional activity in the other enjoy a better guarantee of their rights,

Recognizing the ties of friendship linking the two States,

Have agreed as follows:

TITLE I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

(a) “Legislation means the laws, regulations and other provisions concerning social security referred to in article 2, in force in the territory of each Contracting Party;

(b) “Competent authority” means:

With regard to Spain, the Ministry of Labour and Social Affairs;

With regard to the Republic of Peru, the Ministry of Labour and Promotion of Employment and the Ministry of Economic Affairs and Finance;

(c) “Institution” means an agency or authority responsible for the implementation of the legislation referred to in article 2;

(d) “Competent institution” means the institution responsible, under the laws of each Contracting Party, for recognition of entitlement and granting of benefits or, alternatively, for the administration and implementation of one or more social security schemes;

(e) “Liaison body” means the body responsible for coordination and transmission of information between the institutions of the two Contracting Parties which participates in implementing the Agreement and informing those concerned about the rights and obligations arising therefrom;

(f) “Worker” means any person who, as a result of working or having worked as a wage earner or as a self-employed person, is, or has been, subject to the laws listed in article 2;

(g) “Pensioner” means any person receiving a pension pursuant to the laws of one or both of the Contracting Parties;

(h) “Members of the family and beneficiaries” means the persons recognized as such by the applicable laws of each Contracting Party;

(i) “Residence” means legally recognized ordinary residence;

(j) “Stay” means temporary residence;

(k) “Periods of insurance” means periods of obligatory or voluntary contribution that are defined or recognized as periods of insurance by the laws under which the persons concerned have been covered or are considered to be covered and such other periods as are regarded under those laws as equivalent to periods of insurance;

(l) “Health-care benefits” means medical and pharmaceutical services provided for the purpose of preserving or restoring health in cases of ordinary or occupational illness, maternity or injury, whatever the cause;

(m) “Financial benefit” and “pension” mean any benefit in cash and any pension provided for in the laws which, in accordance with article 2, fall under this Agreement, and any increases resulting from revaluation of or complements or supplements to such benefits;

(n) “Family benefits” means cash benefits paid periodically, where applicable, depending on the number of children, their age, the disability status of any of them and the family income;

(o) “Medical emergency” means a situation in which the provision of health care cannot be deferred without serious risk, or potentially serious risk, to the life or health of the person concerned;

(p) “Private pension system” means the Peruvian social security system of contributions based on the principles of individual capitalization, private administration and State supervision in which benefits are linked to the contributions made by the member. The system provides retirement, disability, survivor and funeral benefits.

2. Other terms or expressions used in this Agreement shall have the meaning assigned to them by the applicable legislation.

Article 2. Material scope

1. This Agreement shall apply:

A. In the case of Peru:

(a) To the laws concerning the contributory social security health scheme and other social security schemes as they relate to health and financial benefits;

(b) To the laws relating to the national pension system and to its special schemes as they relate to financial benefits for disability, retirement and survivorship.

(c) To the laws concerning the private pension system as they relate to financial benefits for retirement, disability, survivorship and funeral expenses.

B. In the case of Spain:

To the laws on contributory benefits of the Spanish Social Security System, with the exception of special schemes for civilian and military public officials, as they relate to:

(a) Health care, in cases of ordinary or occupational illness; injuries, whether or not work-related; and maternity;

(b) Temporary disability in cases of ordinary or non-occupational injuries;

(c) Maternity and risks during pregnancy;

(d) Permanent disability, retirement and survivors’ entitlements;

(e) Family benefits for dependent children;

- (f) Financial benefits for occupational injuries and diseases;
- (g) Death grants.

2. This Agreement shall also apply to laws that in future complement or amend the laws referred to in the preceding paragraph.

3. This Agreement shall apply to legislation that in either Contracting Party extends the laws in force to new groups of persons, provided that the competent authority of the other Party does not object within three months following receipt of the notification of such provisions.

4. This Agreement shall apply to legislation establishing a new social security special scheme or a new branch, provided that the Contracting Parties so agree.

Article 3. Personal scope

This Agreement shall apply to workers and pensioners who are or have been subject to the laws listed in article 2 in either Contracting Party or in both Contracting Parties and to the members of their families and their beneficiaries.

Article 4. Equality of treatment

Nationals of either Contracting Party and the members of their families shall be subject to and benefit from social security in the territory of the other Party under the same conditions as the nationals of that other Party, without prejudice to special provisions set out in this Agreement.

Article 5. Aggregation of insurance periods

1. Where the laws of either Contracting Party make the acquisition, preservation or recovery of entitlement to contributory-type health care and financial benefits conditional on the completion of certain insurance periods, the competent institution shall take into account for this purpose, to the extent necessary, the insurance periods completed under the laws of the other Contracting Party as if they were periods completed under its own laws, provided that the periods in question do not overlap.

2. Where insurance periods completed in the territory of both Contracting Parties are to be aggregated with a view to recognizing the entitlement to benefits, the following rules shall apply:

(a) Where a period of obligatory insurance coincides with a period of voluntary insurance or an equivalent period, the period of obligatory insurance shall be taken into account.

(b) Where two periods of voluntary insurance recognized in both Contracting Parties coincide, each Party shall take into account the periods of voluntary insurance completed in its territory.

(c) Where a period of voluntary insurance completed in one Contracting Party coincides with an equivalent period of insurance completed in the other Party, the period of voluntary insurance shall be taken into account.

(d) Where it is not possible in one Contracting Party to determine accurately at what stage certain periods of insurance were completed, those periods shall be assumed not to overlap with the periods of insurance completed in the territory of the other Party.

3. If periods of insurance are required for admission to voluntary insurance or for optional continuation of insurance, the periods of insurance covered by the worker pursuant to the laws of a Contracting Party shall be added, if necessary, to the periods of insurance covered pursuant to the laws of the other Party, as long as the periods in question do not overlap.

Article 6. Payment of financial benefits abroad

1. Unless this Agreement provides otherwise, financial benefits shall not be subject to reduction, change, suspension, withdrawal or withholding on the grounds that the beneficiary is or resides in the territory of the other Contracting Party, and they shall be paid in that territory.

2. The provisions of the preceding paragraph shall not apply to financial benefits for temporary disability.

3. Pensions recognized under this Agreement for beneficiaries residing in a third country shall be paid, taking into account the preceding paragraphs, on the same terms and for the same period of time as those paid to the nationals who reside in that third country, provided that the laws of that country so permit.

TITLE II. PROVISIONS ON APPLICABLE LEGISLATION

Article 7. General rule

Workers to whom this Agreement is applicable shall be subject exclusively to the social security laws of the Contracting Party in whose territory they are engaged in an occupational activity, without prejudice to the provisions of article 8.

Article 8. Special rules and exceptions

1. The following special rules and exceptions shall apply with regard to the provisions of article 7:

(a) A worker employed by a company which has its headquarters in the territory of either Contracting Party who is sent by that company to the territory of the other Party to carry out work of a temporary nature shall remain wholly subject to the laws of the first Party, provided that the foreseeable duration of the work for which he or she has been relocated does not exceed two years, nor has he or she been sent in replacement of another worker whose relocation period has ended.

(b) If, as a result of unforeseeable circumstances, the duration of the work referred to in the preceding paragraph should exceed two years, the worker shall continue to be subject to the laws of the first Contracting Party for a new period of no longer than one year, provided that the competent authority of the second Party or an organization authorized by it gives its consent.

(c) A self-employed person who normally works in the territory of one Contracting Party in which he or she is insured and who temporarily engages in the same type of work in the territory of the other Party shall remain wholly subject to the laws of the first Party, provided that the foreseeable duration of that work does not exceed two years.

(d) If, as a result of unforeseeable circumstances, the duration of the work referred to in the preceding paragraph should exceed two years, the worker shall continue to be subject to the laws

of the first Contracting Party for a new period of no longer than one year, provided that the competent authority of the second Party or an organization authorized by it gives its consent.

(e) Itinerant personnel working for airlines operating in the territory of both Contracting Parties shall be subject to the laws of the Party in which the company has its headquarters.

(f) An employee who works on a ship shall be subject to the laws of the Contracting Party whose flag the ship is flying.

Nevertheless, when the worker is remunerated for that work by a company or a person domiciled in the territory of the other Contracting Party, he or she shall be subject to the laws of the latter Contracting Party, if he or she resides in its territory. The company or person who pays the remuneration shall be considered the employer with respect to the application of the said laws.

(g) Nationals of one Contracting Party residing in that country who work for a joint fishing company established in the other Contracting Party and on a ship flying the flag of that Contracting Party shall be deemed to be employees of the participant company of the country of which they are nationals and in which they reside and, therefore, shall be subject to the laws of that Contracting Party, and the aforementioned company shall assume its responsibilities as an employer.

(h) Workers employed in the loading, unloading and repair of ships and in security services in a port shall be subject to the laws of the Contracting Party to whose territory the port belongs.

(i) Members of diplomatic missions and consular offices and the personnel privately employed by them shall be governed by the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, of 18 April 1961, and of the Vienna Convention on Consular Relations, of 24 April 1963, without prejudice to the following provisions:

The administrative, technical and service personnel of the diplomatic missions and consular offices of each Party, and the personnel privately employed by the members of such missions and offices, may opt for the application of the legislation of either Contracting Party, provided they are nationals of the sending State or have been subject to its laws.

This option shall be exercised within the first three months following the entry into force of this Agreement or, as the case may be, within three months from the date of commencement of work in the territory of the receiving State.

(j) Public officials of either Contracting Party, other than those referred to in subparagraph (i), who are sent to the territory of the other Party shall be subject to the laws of the Party responsible for the service to which they are attached.

(k) Persons sent by either Contracting Party on cooperation missions to the territory of the other Party shall be subject to the social security laws of the sending Party, unless the cooperation agreements provide otherwise.

2. The competent authorities of the two Contracting Parties or the organizations designated by them may, by mutual accord, establish other exceptions or amend the exceptions provided for in the foregoing paragraphs.

TITLE III. PROVISIONS REGARDING BENEFITS. CHAPTER 1. HEALTH-CARE BENEFITS FOR MATERNITY, ILL. ESSAND INJURY. ARTICLE 9. HEALTH-CARE BENEFITS IN CASES OF TEMPORARY RESIDENCE

1. Workers and pensioners who meet the conditions required by the laws of a Contracting Party for entitlement to health-care benefits, and whose health status is such that they require such benefits in the event of a medical emergency occurring while they are temporarily in the territory of the other Party, shall be entitled to those benefits, provided that they are nationals of the latter Party.

Such benefits shall be provided by the institution of the country in which they are staying in accordance with the terms and conditions of its laws, with the cost to be covered by the competent institution of the other Contracting Party.

2. The provisions of the preceding paragraph shall also apply to the family members and beneficiaries of the worker or pensioner who are accompanying him or her and who are entitled to health care, in accordance with the laws applicable to them.

Article 10. Reimbursement of health-care expenditures

1. The costs of health-care benefits provided by the institution of either Contracting Party under the responsibility of the competent institution of the other Party shall be reimbursed on the basis of the actual expenditure incurred, in accordance with the procedure set out in the administrative agreement provided for in article 29 of this Agreement.

2. In the case of pensioners entitled to health benefits, the cost of such benefits shall be covered, as appropriate, as follows:

(a) Where the pension is payable by the social security system of one of the Contracting Parties, the health benefit shall be covered by the Party responsible for payment of the pension.

(b) Where a pension has been granted by both Contracting Parties, the benefit shall be covered exclusively by the competent institution of the pensioner's place of residence.

Article 11. Extension of health-care benefits

The competent authorities of both Contracting Parties may, by mutual agreement, extend health-care benefits in new situations or to new groups of persons.

CHAPTER 2. FINANCIAL BENEFITS FOR TEMPORARY DISABILITY, MATERNITY, BREASTFEEDING AND RISKS DUR. NG PREGNANCY

Article 12. Recognition of entitlement

Financial benefits for temporary disability resulting from ordinary illness or a non-occupational injury, and financial benefits for maternity, breastfeeding and for risks during pregnancy, shall be provided by the competent institution of the Contracting Party whose legislation is applicable to the worker in accordance with that legislation and with articles 7 and 8 of this Agreement.

CHAPTER 3. FINANCIAL BENEFITS FOR PERMANENT DISABILITY, RETIREMENT AND SURVIVORS

*Section 1. Common provisions**Article 13. Determination of entitlement and calculation of financial benefits*

Any worker who has been subject to the laws of either Contracting Party shall be entitled to the benefits set out in this chapter, on the following terms:

1. The competent institution of each Contracting Party shall determine the entitlement and calculate the financial benefit, considering solely the periods of insurance completed in that Contracting Party.

2. The competent institution of each Contracting Party shall determine entitlement to financial benefits by aggregating the periods of insurance completed under the laws of the two Contracting Parties. When, after this aggregation, entitlement to benefits has been established, the amount to be paid shall be calculated by applying the following rules:

(a) The amount of the financial benefit to which the person concerned is entitled shall be determined as if all the periods of insurance added together had been completed under the laws of that person's State (theoretical pension);

(b) The amount of the benefit shall be established by applying to the theoretical pension the same ratio that exists between the period of insurance completed in that Contracting Party and the total periods of insurance completed in both Parties (pro rata temporis pension).

(c) Where, under the laws of either Contracting Party, a maximum period of insurance is required for the recognition of a full pension, the competent institution of that Party shall take into account, in calculating the pension, only the periods of insurance completed in the other Party which are necessary to attain that full pension. The above provisions shall not apply to financial benefits the amount of which is not based on insurance periods.

3. Having determined the entitlement in accordance with the paragraphs 1 and 2 above, the competent institution of each Contracting Party shall recognize and pay the financial benefit that is most advantageous to the person concerned, regardless of the decision taken by the competent institution of the other Contracting Party.

Article 14. Amounts due for periods of voluntary insurance

For the calculation of the theoretical pension and the actual amount of the financial benefit in accordance with the provisions of article 13, paragraph 2, the rules laid down in article 5 shall apply.

The amount actually due, calculated in accordance with article 13, paragraph 2, shall be increased by the amount relating to periods of voluntary insurance not taken into account in accordance with article 5, paragraph (2) (a). This increase shall be calculated in accordance with the provisions of the laws of the Contracting Party under which the voluntary insurance periods have been completed.

Article 15. Periods of insurance of less than one year

1. Notwithstanding the provisions of article 13, paragraph 2, where the total duration of the insurance periods completed under the laws of a Contracting Party is less than one year and where no entitlement to financial benefits exists under the laws of that Party, the institution of that Party shall not recognize any financial benefit for the period concerned.

The aforesaid periods shall be taken into account, where necessary, by the competent institution of the other Contracting Party for the purpose of recognizing entitlement to and determining the amount of the pension in accordance with its own laws, but it shall not apply the provisions of article 13, paragraph 2 (b).

2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, periods of less than one year credited under the laws of both Contracting Parties may be aggregated by the Party in which the person concerned qualifies for the financial benefit. In the event of entitlement to the benefit in both Parties, the benefit shall be recognized only by the Party in which the worker's last contributions are credited. In such cases, the provisions of article 13, paragraph 2 (b), of this Agreement shall not apply to the payment of the pension.

Article 16. Specific conditions for the recognition of entitlement to financial benefits

1. Where the laws of either Contracting Party make the granting of the financial benefits provided for under this chapter conditional on the worker concerned having been subject to its laws at the time when the incident giving rise to the benefit occurred, that condition shall be deemed to have been fulfilled if, at that time, the worker is insured under the laws of the other Contracting Party or, failing that, if he or she is receiving a financial benefit from that Party based on its own periods of insurance.

For the recognition of survivors' benefits, account shall be taken, where necessary, of whether the person concerned was employed and contributing or was a pensioner in accordance with the laws of the other Party.

2. Where the laws of either Contracting Party make the recognition of a financial benefit conditional on periods of contribution having been completed within a specific period immediately prior to the incident giving rise to the benefit, this condition shall be deemed to have been fulfilled if the person concerned completes those periods during the period immediately prior to the recognition of the benefit in the other Party.

3. The clauses concerning reduction, suspension or withdrawal provided for by the laws of either Contracting Party in the case of pensioners engaged in gainful employment shall be applicable to them even if they are engaged in such employment in the territory of the other Contracting Party.

Article 17. Calculation of periods of contribution to special schemes or in certain occupations

Where the laws of either Contracting Party makes entitlement to or the granting of certain benefits conditional on the completion of insurance periods in an occupational activity covered by a special scheme or in a particular occupation or line of work, periods completed under the laws of the other Party shall be taken into account for the purpose of granting such entitlements or benefits

only if they have been completed under a scheme of the same nature or, in the absence of such a scheme, in the same occupation or, where appropriate, in a similar line of work.

If, after the periods thus completed have been taken into account, the person concerned does not meet the required conditions of eligibility for a financial benefit under a special scheme, those periods shall be taken into account with a view to granting financial benefits under the general scheme or another special scheme under which the person concerned might be entitled.

Article 18. Determination of degree of disability

1. In assessing reduction of capacity to work with a view to granting appropriate financial benefits for disability, the competent institution of each Contracting Party shall carry out its evaluation in accordance with the applicable laws.

2. For the purposes of the preceding paragraph, the competent institutions of each Contracting Party shall take into account the medical reports and administrative data provided by the institutions of the other Contracting Party. However, each institution may have the insured person examined by a doctor of its choice and at its expense.

Section 2. Application of Spanish legislation

Article 19. Regulatory basis for financial benefits

1. In order to establish the regulatory basis for financial benefits, the competent institution shall take into account solely the periods of insurance completed under its laws.

2. In order to determine the regulatory basis for financial benefits where the provisions of article 13, paragraph 2, apply, the following rules shall be followed:

(a) The calculation of the Spanish theoretical pension shall be based on the actual contributions of the insured person in Spain during the years immediately prior to the payment of the last contribution to Spanish social security.

(b) The amount of the pension shall be increased by the amount of any increases and revaluations calculated for each subsequent year for pensions of the same nature.

Section 3. Application of the legislation of the Republic of Peru

Article 20. Regulatory basis for financial benefits

1. In order to establish the regulatory basis for financial benefits, the competent institution shall take into account solely the periods of insurance completed under its laws.

2. In order to determine the regulatory basis for financial benefits where the provisions of article 13, paragraph 2, apply, the following rules shall be followed:

(a) The calculation of the Peruvian theoretical pension shall be based on the actual contributions of the insured person in Peru during the years immediately prior to the payment of the last contribution to Peruvian social security.

(b) The amount of the financial benefit shall be increased by the amount of the increases for pensions of the same nature.

Article 21. Private pension system

1. Persons affiliated with a private pension fund scheme in Peru shall finance their retirement pensions out of the accumulated balance in their individual capitalization accounts which, where applicable, include recognition bonds, which shall be granted under the conditions established under Peruvian laws.

2. Notwithstanding the foregoing, when said account is not sufficient to finance a retirement benefit equivalent to a predetermined pension amount as established under Peruvian laws, the pension shall be provided by the State, and the provisions of article 13 of this Agreement shall apply.

3. In the case of disability pensions, survivors' benefits and funeral expenses, the relevant pension or benefit shall also be funded out of the accumulated balance in the individual capitalization accounts, under the applicable risk management model and in accordance with Peruvian laws.

4. For the purposes of determining the conditions and requirements for the recognition and payment of the aforementioned benefits, the provisions of Peruvian law shall apply.

CHAPTER 4. FAMILY BENEFITS FOR DEPENDENT CHILDREN

Article 22. Recognition of entitlement to family benefits

1. A worker insured under the laws of one Contracting Party or a person receiving a pension from one of the Contracting Parties shall be entitled, for family members who reside in the territory of the other Contracting Party, to the family benefits provided for under the laws of the Party in which he or she is insured or from which he or she is receiving a pension, as if the family members resided in the territory of that Contracting Party.

2. In the case of entitlement to benefits during the same period and for the same family member under the laws of both Contracting Parties, the responsibility shall fall on the Contracting Party in which the worker is insured or under whose laws the pension is paid.

3. If, notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, there is still a concurrence of rights, the benefits shall be paid only by the Contracting Party in whose territory the family members are residing.

CHAPTER 5. FINANCIAL BENEFITS FOR OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES

Article 23. Determination of entitlement to financial benefits

Entitlement to benefits arising from occupational injuries or diseases shall be determined in accordance with the laws of the Contracting Party to which the worker is subject on the date on which the injury occurred or the disease was contracted.

Article 24. Aggravation of sequelae of an occupational injury

If a worker who is a victim of an occupational injury suffers an aggravation of the sequelae of the injury while he or she is subject to the laws of the other Party, any financial benefits to which the worker is entitled for such aggravation shall be the responsibility of the competent institution of the Contracting Party in which the worker was insured when the occupational injury occurred.

Article 25. Occupational disease

1. Financial benefits for occupational diseases shall be determined in accordance with the laws of the Contracting Party applicable to the worker while he or she was engaged in the activity entailing a risk of such disease, even if the disease was diagnosed for the first time while the worker was subject to the laws of the other Party.

2. Where a worker has successively or alternately engaged in that activity while subject to the laws of both Contracting Parties, entitlement shall be determined in accordance with the laws of the Party to which the worker is or was last subject in relation to that activity. In the event that the worker fails to qualify for financial benefits in that Contracting Party, the provisions of the laws of the first shall apply.

Article 26. Aggravation of an occupational disease

1. When a financial benefit for occupational disease has been paid by one of the Contracting Parties, that Party shall be liable for any aggravation of the disease even if the worker is subject to the laws of the other Party, provided that the worker has not engaged in an activity entailing the same risk while subject to the laws of the latter Party.

2. If, after being granted a disability pension by the institution of either Contracting Party as a result of an occupational disease, the beneficiary engages in an activity likely to aggravate the existing occupational disease while subject to the laws of the other Party, the competent institution of the first Party shall continue to pay the original benefit granted without taking into account any aggravation and in accordance with the provisions of its laws. The competent institution of the second Party, to whose laws the beneficiary was subject when the aggravation occurred, shall grant the beneficiary a financial benefit equal to the difference between the amount of the benefit to which the beneficiary is entitled following the aggravation and the amount of the financial benefit to which the beneficiary would have been entitled in that Party before the aggravation.

Article 27. Consideration of sequelae of earlier occupational injuries and diseases

In assessing reduction of capacity resulting from an occupational injury or disease, account shall be taken of the sequelae of any previous occupational injuries or diseases that the worker may have suffered even if he or she was subject to the laws of the other Contracting Party when they occurred.

CHAPTER VI. FUNERAL AND DEATH BENEFITS

Article 28. Funeral allowances and death grants

Funeral allowances and death grants shall be governed by the laws that were applicable to the worker at the time of death.

1. In the case of pensioners who had been entitled to financial benefits under the laws of both Contracting Parties, recognition of the entitlement shall be regulated by the laws of the Contracting Party in whose territory the insured person resided.

2. If the pensioner's residence was in a third country, the applicable laws, in the event that he or she was entitled to financial benefits in both Contracting Parties, shall be those of the Contracting Party where he or she was insured for the last time.

TITLE IV. MISCELLANEOUS, INTERIM AND FINAL PROVISIONS. CHAPTER 1. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 29. Powers and obligations of the competent authorities

1. The competent authorities of the two Contracting Parties shall be entrusted with establishing the administrative agreement necessary for the implementation of this Agreement.

2. The competent authorities of both Parties shall:

(a) Designate their respective liaison bodies;

(b) Communicate the measures taken at the national level for the implementation of this Agreement;

(c) Notify all legislative and regulatory provisions amending those referred to in article 2;

(d) Extend their good offices and the broadest possible technical and administrative cooperation for the implementation of this Agreement;

(e) Interpret any provisions of the Agreement which may create uncertainties for their competent institutions.

3. A joint commission, chaired by the competent authorities of the two Contracting Parties, may meet at the request of either such authority in order to examine any problems that may arise in implementing this Agreement and the administrative agreement.

Article 30. Competent institutions in the private sector or subject to private law rules in Peru

The application of the provisions of this Agreement involving individually funded social security institutions, competent institutions in the private sector and competent institutions subject to private law rules shall be specifically regulated in the administrative agreement provided for in article 29 of this Agreement.

Article 31. Submission of documents

1. Any claims, notices, appeals and other documents that must be submitted within a prescribed period to the appropriate authorities or institutions of a Contracting Party in accordance with its laws shall be considered to have been submitted to them if they were delivered to the appropriate authority or institution of the other Party within the same period.

2. Any claim for a benefit submitted pursuant to the laws of one Contracting Party shall be considered to be a claim for the corresponding benefit under the laws of the other Party, provided that the claimant expressly states, or it is possible to deduce from the documentation presented, that he or she was engaged in an occupational activity or was insured in the territory of that Party.

Article 32. Administrative support between institutions

1. The competent institutions of the two Contracting Parties may, at any time, request medical examinations and verification of facts and documents which may result in the acquisition, modification, suspension, withdrawal, cancellation or maintenance of entitlement to benefits awarded by them. Any costs incurred as a result shall be reimbursed without delay by the competent institution requesting the examination or verification, upon receipt of an itemized statement of such costs.

2. If the competent institution of either Contracting Party finds, on paying or reviewing a financial benefit under the provisions of title III of this Agreement, that it has made an overpayment to the beneficiary, it may request the other Party's competent institution which owes financial benefits of the same kind to the same beneficiary to withhold the amount of the overpayment from the first payment of arrears in periodic payments, within the limits set in the laws of the withholding Party. The latter institution shall transfer the amount withheld to the creditor institution.

Article 33. Exemptions in connection with administrative certificates and documents

1. Any exemption from recording fees, drafting fees, stamp duties and consular fees or other similar payments provided for in the legislation of the two Contracting Parties shall be extended to certificates and documents issued by the competent agencies or institutions of the other Party in implementation of this Agreement.

2. All administrative certificates and documents issued under this Agreement shall be exempt from legalization requirements.

Article 34. Updating or revaluation of financial benefits

Financial benefits recognized pursuant to the provisions of title III of this Agreement shall be updated or revalued in accordance with the domestic laws of each Contracting Party, taking into account the provisions of this Agreement.

Article 35. Terms and guarantee of payment of financial benefits

1. The competent institutions in each Contracting Party shall be deemed to have discharged their obligation to pay a benefit pursuant to this Agreement when they make the payment in their national currency.

2. Should provisions restricting the transfer of foreign currency be promulgated in either Contracting Party, both Parties shall immediately adopt the measures necessary to guarantee the effective exercise of the rights arising under this Agreement.

Article 36. Settlement of disputes

1. The competent authorities shall resolve through negotiations any differences of interpretation with regard to this Agreement and its administrative agreement.

2. Any dispute that has not been resolved through negotiations within a period of six months from the start of the negotiations shall be submitted to an arbitral commission, the composition and procedures of which shall be established by mutual consent between the Contracting Parties. The decisions of the arbitral commission shall be binding and final.

CHAPTER 2. INTERIM PROVISIONS

Article 37. Calculation of periods prior to the entry into force of the Agreement

Insurance periods completed under the laws of each Contracting Party prior to the date of entry into force of this Agreement shall be taken into account in determining entitlement to and the amount of the benefits awarded thereunder.

Article 38. Originating events preceding the entry into force of the Agreement

1. The implementation of this Agreement shall confer entitlement to benefits for events that occurred prior to the date of its entry into force. However, in no case shall financial benefits be paid for periods prior to its entry into force.

2. Pensions paid by one or both of the Contracting Parties or entitlement to pensions denied prior to the entry into force of the Agreement may be reviewed under its provisions and in accordance with the legal procedure established in each Party, at the request of the persons concerned. Any entitlement shall be effective from the date of the request, unless the laws of the Party concerned set out a more favourable provision.

No lump-sum benefits that have been paid may be reviewed.

CHAPTER 3. FINAL PROVISIONS

Article 39. Period of validity of the Agreement

1. This Agreement is concluded for an indefinite period and may be terminated in whole or in part by either Contracting Party through a notification addressed to the other Party. In that event, the Agreement shall cease to have effect six months following the transmission of such notification.

2. In the event of termination, the provisions of this Agreement shall continue to apply to entitlements granted pursuant to it. The Contracting Parties shall adopt measures guaranteeing any entitlements in the process of being acquired which derive from periods of insurance completed prior to the date of termination of the Agreement.

Article 40. Termination of the Agreement and Administrative Agreement between Peru and Spain

Upon the entry into force of this Agreement, the Agreement on social security between the Governments of Peru and Spain, signed on 24 July 1964, and the Administrative Agreement on social security between the Government of Peru and the Kingdom of Spain, signed on 24 November 1978, and the Supplementary Agreement thereto, shall cease to have effect.

This Agreement shall guarantee any entitlements acquired under the Agreement of 24 July 1964 and the Administrative Agreement of 24 November 1978 and the Supplementary Agreement thereto.

Article 41. Entry into force

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the month in which each Contracting Party has received from the other Party written notification that all regulatory and constitutional requirements for entry into force of the Agreement have been fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF, the authorized representatives of the two Contracting Parties have signed this Agreement.

DONE at Madrid on 16 June 2003 in two originals in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:
ANA PALACIO
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of Peru:
ALLAN WAGNER
Minister for Foreign Affairs

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

Le Royaume d'Espagne et la République du Pérou, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,

déterminés à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

reconnaissant l'importance d'assurer une meilleure garantie de leurs droits aux travailleurs de chacun des deux États qui ont exercé ou exercent une activité professionnelle dans l'autre État,

reconnaissant les liens d'amitié qui unissent les deux États,

sont convenus de ce qui suit :

Titre I. Dispositions générales

Article premier. Définitions

1. Aux fins du présent Accord :

a) on entend par « législation » les lois, règlements et autres dispositions concernant la sécurité sociale visés à l'article 2 en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes ;

b) on entend par « autorité compétente » :

en ce qui concerne le Royaume d'Espagne : le Ministère du travail et des affaires sociales ;

en ce qui concerne la République du Pérou, le Ministère du travail et de la promotion de l'emploi et le Ministère de l'économie et des finances ;

c) on entend par « institution » l'organisme ou l'autorité chargés de l'application de la législation visée à l'article 2 ;

d) on entend par « institution compétente » l'institution chargée, en vertu de la législation de chaque Partie contractante, de la reconnaissance du droit à prestations et de l'octroi de celles-ci ou, à défaut, de la gestion et de l'application d'un ou de plusieurs régimes de sécurité sociale ;

e) on entend par « organisme de liaison » l'organisme responsable de la coordination et de la transmission des renseignements échangés entre les institutions des deux Parties contractantes, qui intervient dans l'application du présent Accord et qui informe les personnes concernées sur les droits et les obligations qui en découlent ;

f) on entend par « travailleur » toute personne qui, à la suite d'une activité exercée en tant que salariée ou pour son compte, est ou a été soumise aux lois énumérées à l'article 2 ;

g) on entend par « pensionné » toute personne qui perçoit une pension en vertu de la législation de l'une ou des deux Parties contractantes ;

h) on entend par « membres de la famille et ayants droit » les personnes reconnues comme telles par la législation applicable de chaque Partie contractante ;

i) on entend par « résidence » la résidence ordinaire légalement reconnue ;

j) on entend par « lieu de séjour » le lieu de résidence temporaire ;

k) on entend par « périodes d'assurance » les périodes de cotisation obligatoire ou volontaire qui sont définies ou reconnues comme périodes d'assurance par la législation en vertu de laquelle les intéressés ont été couverts ou sont considérés comme couverts, ainsi que les autres périodes qui sont considérées par cette législation comme équivalentes aux périodes d'assurance ;

- l) on entend par « prestations de soins de santé » les services médicaux et pharmaceutiques fournis dans le but de préserver ou de rétablir la santé en cas de maladie ordinaire ou professionnelle, de maternité ou d'accident, quelle qu'en soit la cause ;
- m) on entend par « prestation financière » et « pension » toute prestation en espèces et toute pension prévue par la législation qui, conformément à l'article 2, relèvent du présent Accord, ainsi que les augmentations résultant de la réévaluation de ces prestations ou les compléments ou suppléments à celles-ci ;
- n) on entend par « allocations familiales » des prestations en espèces versées périodiquement, le cas échéant, en fonction du nombre d'enfants, de leur âge, de l'état d'invalidité de l'un d'entre eux et du revenu familial ;
- o) on entend par « urgence médicale » une situation dans laquelle la prestation de soins de santé ne peut être différée sans risque grave, ou potentiellement grave, pour la vie ou la santé de la personne concernée ;
- p) on entend par « système de pension privé » le système péruvien de sécurité sociale de cotisations basé sur les principes de la capitalisation individuelle, de l'administration privée et du contrôle de l'État, dans lequel les prestations sont liées aux cotisations versées par l'affilié. Le système offre des prestations de retraite, d'invalidité, des pensions de réversion et des allocations obsèques.

2. Les autres termes utilisés dans le présent Accord ont la signification que leur attribue la législation applicable.

Article 2. Champ d'application matériel

1. Le présent Accord s'applique :

A. en ce qui concerne le Pérou :

- a) à la législation concernant le régime contributif de sécurité sociale en matière de santé et les autres régimes de sécurité sociale en matière de santé et de prestations financières ;
- b) à la législation relative au système national de retraite et à ses régimes spéciaux en ce qui concerne les prestations financières d'invalidité, de retraite et pensions de réversion.
- c) à la législation concernant le système de retraite privé en ce qui concerne les prestations financières pour la retraite, l'invalidité, les pensions de réversion et les allocations obsèques.

B. en ce qui concerne l'Espagne :

à la législation sur les prestations contributives du système espagnol de sécurité sociale, à l'exception des régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires, en ce qu'elles concernent :

- a) les soins de santé, en cas de maladie ordinaire ou professionnelle ; les blessures, qu'elles soient ou non liées au travail ; et la maternité ;
- b) l'incapacité temporaire en cas de blessures ordinaires ou non professionnelles ;
- c) la maternité et les risques pendant la grossesse ;
- d) les droits à prestations d'invalidité permanente, de retraite et pensions de réversion ;
- e) les allocations familiales pour les enfants à charge ;
- f) les prestations financières pour les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
- g) les capitaux décès.

2. Le présent Accord s'applique également aux lois qui à l'avenir compléteront ou modifieront la législation visée au paragraphe précédent.

3. Le présent Accord s'applique aux dispositions législatives qui, chez l'une ou l'autre des Parties contractantes, étendent la législation en vigueur à de nouveaux groupes de personnes, pour

autant que l'autorité compétente de l'autre Partie ne s'y oppose pas dans les trois mois qui suivent la réception de la notification de ces dispositions.

4. Le présent Accord s'applique aux législations instituant un nouveau régime spécial de sécurité sociale ou une nouvelle branche, pour autant que les Parties contractantes en conviennent.

Article 3. Personnes visées

Le présent Accord s'applique aux travailleurs et aux pensionnés qui sont ou ont été soumis aux lois énumérées à l'article 2 dans l'une ou l'autre des Parties contractantes ou dans les deux Parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs ayants droit.

Article 4. Égalité de traitement

Sans préjudice des dispositions particulières contenues le présent Accord, les ressortissants de l'une des Parties contractantes et les membres de leur famille sur le territoire de l'autre Partie, les mêmes droits et obligations en matière de sécurité sociale que les ressortissants de cette dernière.

Article 5. Totalisation des périodes d'assurance

1. Lorsque la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de soins de santé et financières de type contributif à la réalisation de certaines périodes d'assurance, l'institution compétente tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de l'autre Partie contractante comme s'il s'agissait de périodes accomplies en vertu de sa propre législation, pour autant que les périodes en question ne coïncident pas.

2. Lorsqu'il faut procéder à la totalisation des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des deux Parties contractantes aux fins de la reconnaissance du droit à prestations, les règles suivantes s'appliquent :

- a) quand une période d'assurance obligatoire coïncide avec une période d'assurance volontaire ou une période équivalente, il est tenu compte de la période d'assurance obligatoire.
- b) quand deux périodes d'assurance volontaire reconnues dans les deux Parties contractantes coïncident, chacune des Parties prend en considération les périodes d'assurance volontaire accomplies sur son territoire.
- c) lorsqu'une période d'assurance volontaire accomplie dans une Partie contractante coïncide avec une période d'assurance équivalente accomplie dans l'autre Partie, la période d'assurance volontaire est prise en considération.
- d) quand il n'est pas possible de déterminer précisément, sur le territoire d'une Partie contractante, l'époque au cours de laquelle des périodes déterminées d'assurance ont été accomplies, il est présumé que les périodes en question ne coïncident pas avec les périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre Partie.

3. Si des périodes d'assurance sont exigées au titre de l'admission à l'assurance volontaire ou du maintien facultatif de l'assurance, les périodes d'assurance couvertes par le travailleur en vertu de la législation d'une Partie contractante sont ajoutées, si nécessaire, aux périodes d'assurance couvertes en vertu de la législation de l'autre Partie, pour autant que les périodes en question ne coïncident pas.

Article 6. Versement de prestations financières à l'étranger

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, les prestations financières ne peuvent pas faire l'objet d'une réduction, modification, suspension ou d'un retrait au motif que le bénéficiaire se trouve ou réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, et sont versées sur ce territoire.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux prestations financières pour incapacité temporaire.

3. Les pensions reconnues en vertu du présent Accord aux bénéficiaires résidant dans un pays tiers sont versées, compte tenu des paragraphes précédents, dans les mêmes conditions et pour la même durée que celles versées aux ressortissants qui résident dans ce pays tiers, pour autant que la législation de ce pays le permette.

Titre II. Dispositions relatives à la législation applicable

Article 7. Règle générale

Les travailleurs auxquels s'applique le présent Accord sont soumis exclusivement à la législation relative à la sécurité sociale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils exercent une activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l'article 8.

Article 8. Règles et exceptions particulières

1. Les règles et exceptions particulières suivantes s'appliquent aux dispositions de l'article 7 :

- a) le travailleur salarié d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties contractantes qui est envoyé par cette dernière sur le territoire de l'autre Partie en vue d'y effectuer un travail temporaire, demeure entièrement soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas deux ans, et qu'il n'ait pas été envoyé en remplacement d'un autre travailleur dont la période de déplacement a pris fin.
- b) si, par suite de circonstances imprévisibles, la durée du travail visée au précédent paragraphe devait dépasser deux ans, le travailleur continuerait à être soumis à la législation de la première Partie contractante pour une nouvelle période n'excédant pas un an, à condition que l'autorité compétente de la deuxième Partie ou une organisation autorisée par celle-ci donne son accord.
- c) une personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'une Partie contractante dans laquelle elle est assurée et qui effectue temporairement le même type de travail sur le territoire de l'autre Partie demeure entièrement soumise à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas deux ans.
- d) si, par suite de circonstances imprévisibles, la durée du travail visée au précédent paragraphe devait dépasser deux ans, le travailleur continuerait à être soumis à la législation de la première Partie contractante pour une nouvelle période n'excédant pas un an, à condition que l'autorité compétente de la deuxième Partie ou une organisation autorisée par celle-ci donne son accord.
- e) le personnel itinérant exerçant son activité au service d'entreprises de transport aérien sur le territoire des deux Parties contractantes est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.
- f) les personnes employées à bord d'un navire sont soumises à la législation de la Partie contractante dont le navire bat le pavillon.

Néanmoins, lorsque la personne est rémunérée pour ce travail par une entreprise ou une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Partie contractante, elle est soumise à la législation

de cette dernière Partie contractante, à condition qu'elle réside sur son territoire. L'entreprise ou la personne qui verse la rétribution est considérée comme l'employeur aux fins de l'application de ladite législation.

g) les ressortissants d'une Partie contractante qui ont leur résidence dans celle-ci et qui offrent leurs services à une entreprise de pêche mixte constituée dans l'autre Partie contractante et à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie contractante, sont considérés comme faisant partie de l'entreprise participante du pays duquel ils sont ressortissants et dans lequel ils résident et, par conséquent, sont soumis à la législation de cette Partie contractante, l'entreprise précitée assumant ses responsabilités en tant qu'employeur.

h) les travailleurs employés pour des travaux de chargement, de déchargement et de réparation des navires, ainsi que pour des services de sécurité dans un port sont soumis à la législation de la Partie contractante au territoire duquel le port appartient.

i) les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 s'appliquent aux membres des missions diplomatiques et des bureaux consulaires ainsi qu'au personnel qu'ils emploient à titre privé, sans préjudice des dispositions suivantes :

le personnel administratif et technique, le personnel de service des missions diplomatiques et des bureaux consulaires de chacune des Parties, ainsi que le personnel employé à titre privé par les membres de ces missions et bureaux, peuvent opter pour l'application de la législation de l'une des Parties contractantes, à condition qu'ils soient des ressortissants de l'État accréditant ou qu'ils aient été soumis à sa législation.

Cette option doit être exercée dans les trois premiers mois après l'entrée en vigueur du présent Accord ou, selon le cas, dans les trois mois suivant la date de début de l'activité sur le territoire de l'État accréditaire.

j) les agents publics de l'une des Parties contractantes, autres que ceux visés à l'alinéa i), qui sont envoyés sur le territoire de l'autre Partie, sont soumis à la législation de la Partie dont relève le service auquel ils sont rattachés.

k) les personnes envoyées par l'une des Parties contractantes en mission de coopération sur le territoire de l'autre Partie sont soumises à la législation relative à la sécurité sociale du pays d'origine, sauf disposition contraire des accords de coopération.

2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les organismes désignés par celles-ci peuvent, d'un commun accord, établir d'autres exceptions ou modifier celles qui sont prévues aux paragraphes qui précèdent.

Titre III. Dispositions relatives aux prestations

CHAPITRE PREMIER. PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ EN CAS DE MATERNITÉ, DE MALADIE ET D'ACCIDENT

Article 9. Prestations de soins de santé en cas de résidence provisoire

1. Les travailleurs et les pensionnés qui remplissent les conditions requises par la législation d'une Partie contractante pour avoir droit aux prestations de soins de santé, et dont l'état de santé est tel qu'ils ont besoin de ces prestations en cas d'urgence médicale survenant pendant qu'ils se trouvent temporairement sur le territoire de l'autre Partie, ont droit à ces prestations, à condition qu'ils soient ressortissants de cette dernière.

Ces prestations sont fournies par l'institution du pays de séjour selon les clauses et conditions prévues par sa législation, la charge en incombant à l'institution compétente de l'autre Partie contractante.

2. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également aux membres de la famille et aux ayants droit du travailleur ou du pensionné qui l'accompagnent et qui ont droit aux prestations de soins de santé, conformément à la législation qui leur est applicable.

Article 10. Remboursement des dépenses de soins de santé

1. Le coût des prestations de soins de santé fournies par l'institution de l'une des Parties contractantes sous la responsabilité de l'institution compétente de l'autre Partie est remboursé sur la base des frais réels engagés, selon la procédure énoncée dans l'accord administratif visé à l'article 29 du présent Accord.

2. Dans le cas des pensionnés ayant droit à des prestations de santé, le coût de ces prestations est couvert, le cas échéant, comme suit :

- a) lorsque la pension est due par le système de sécurité sociale de l'une des Parties contractantes, la prestation de santé est couverte par la Partie responsable du paiement de la pension.
- b) lorsqu'une pension a été accordée par les deux Parties contractantes, la prestation incombe exclusivement à l'institution compétente du lieu de résidence du pensionné.

Article 11. Extension des prestations de soins de santé

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent, d'un commun accord, étendre les prestations de soins de santé à de nouvelles situations ou de nouveaux groupes de personnes.

Chapitre 2. Prestations financières pour incapacité temporaire, maternité, allaitement et risques pendant la grossesse

Article 12. Reconnaissance du droit aux prestations

Les prestations financières pour une incapacité temporaire résultant d'une maladie ordinaire ou d'un accident non professionnel, ainsi que les prestations financières pour la maternité, l'allaitement et les risques pendant la grossesse, sont assurées par l'institution compétente de la Partie contractante dont la législation est applicable au travailleur, conformément à cette législation et aux articles 7 et 8 du présent Accord.

Chapitre 3. Prestations financières pour invalidité permanente, retraite et pensions de réversion

Section 1. Dispositions communes

Article 13. Détermination des droits à prestations et calcul des prestations financières

Tout travailleur qui a été soumis à la législation d'une des Parties contractantes a droit aux prestations prévues au présent chapitre, dans les conditions suivantes :

1. L'institution compétente de chaque Partie contractante détermine les droits et calcule le montant des prestations financières en tenant compte uniquement des périodes d'assurance accomplies sur le territoire de ladite Partie contractante.

2. L'institution compétente de chaque Partie contractante établit également le droit aux prestations financières en calculant le total des périodes d'assurance accomplies en étant soumis à la législation des deux parties contractantes. Une fois le total calculé et le droit à prestation déterminé, il convient d'appliquer les règles suivantes pour fixer le montant à payer :

- a) le montant de la prestation financière à laquelle la personne concernée a droit est déterminé comme si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies dans le cadre de la législation de l'État dont cette personne dépend (pension théorique) ;
- b) le montant de la prestation est établi en appliquant à la pension théorique la même proportion qui existe entre la période d'assurance accomplie dans cette Partie contractante et le total des périodes d'assurance accomplies dans les deux Parties (pension au prorata du temps) ;
- c) Si, en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes, une durée maximale d'assurance est requise pour la reconnaissance d'une pension complète, l'institution compétente de cette Partie ne tient compte, pour le calcul de la pension, que des périodes d'assurance accomplies dans l'autre Partie qui sont nécessaires pour atteindre cette pension complète. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux prestations financières dont le montant n'est pas calculé en fonction de périodes d'assurance.

3. Après avoir déterminé le droit à prestations conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'institution compétente de chaque Partie contractante reconnaît et verse la prestation la plus favorable à la personne concernée, indépendamment de la décision prise par l'institution compétente de l'autre Partie contractante.

Article 14. Montants dus pour des périodes d'assurance volontaire

Pour le calcul de la pension théorique et du montant effectif de la prestation financière conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, les règles énoncées à l'article 5 sont applicables.

Le montant effectivement dû, calculé conformément au paragraphe 2 de l'article 13, est majoré du montant relatif aux périodes d'assurance volontaire non prises en compte conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5. Cette majoration est calculée conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante sous laquelle les périodes d'assurance volontaire ont été accomplies.

Article 15. Périodes d'assurance inférieure à une année

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante est inférieure à un an, et que le droit aux prestations financières existe sous la législation de cette Partie, l'institution de cette Partie ne reconnaît aucune prestation financière pour la période considérée.

Les périodes susmentionnées sont prises en considération, s'il y a lieu, par l'institution compétente de l'autre Partie contractante aux fins de la reconnaissance du droit à prestation et du calcul du montant de la pension selon la législation de cette Partie. Toutefois, cette dernière n'applique pas les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 13.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les périodes inférieures à une durée d'un an comptabilisées conformément à la législation des deux Parties contractantes peuvent être totalisées par la Partie sur le territoire de laquelle la personne concernée remplit les conditions requises pour bénéficier de la prestation financière. En cas de droit à la prestation dans les deux Parties contractantes, la prestation n'est reconnue que par la Partie dans laquelle les dernières cotisations du travailleur sont créditées. Dans un tel cas, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 13 ne s'appliquent pas au versement de la pension.

Article 16. Conditions spécifiques à la reconnaissance du droit aux prestations financières

1. Dans le cas où, en vertu de la législation d'une Partie contractante, les prestations financières visées dans le présent chapitre ne seraient accordées que si le travailleur concerné était assujéti à ladite législation au moment où s'est produit l'évènement ouvrant droit à prestation, cette condition est réputée remplie lorsque, au moment considéré, le travailleur est assuré en vertu de la législation de l'autre Partie contractante ou, à défaut, qu'il reçoit une prestation financière de cette Partie sur la base de ses propres périodes d'assurance.

Pour la reconnaissance des pensions de réversion, il sera tenu compte, s'il y a lieu, de la situation de la personne concernée, à savoir si elle exerçait une activité et cotisait ou percevait une pension, conformément à la législation de l'autre Partie.

2. Si la législation d'une Partie contractante exige, pour que la prestation financière soit reconnue, qu'aient été accomplies des périodes de cotisation à un moment donné précédant immédiatement l'évènement ouvrant droit à la prestation, cette condition est réputée remplie si la personne concernée accomplit lesdites périodes pendant la période précédant immédiatement la reconnaissance de la prestation dans l'autre Partie.

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de retrait prévues par la législation de l'une des Parties dans le cas de pensionnés exerçant une activité professionnelle leur sont applicables même s'ils exercent cette activité sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 17. Calcul des périodes de cotisations au titre de régimes spéciaux ou de professions spécifiques

Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne le droit aux prestations ou l'octroi de certains avantages à l'accomplissement de périodes d'assurance dans une profession assujéti à un régime spécial dans une profession ou un emploi spécifique, les périodes accomplies conformément à la législation de l'autre Partie ne seront prises en considération pour l'octroi desdites prestations ou desdits avantages que s'ils ont été portés au crédit de l'intéressé en vertu d'un régime de même nature, ou à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans un emploi similaire.

Si, après l'intégration des périodes accomplies dans ces conditions, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions ouvrant droit à une prestation financière au regard d'un régime spécial, ces périodes sont prises en considération pour l'octroi de prestations financières au titre du régime général ou d'un autre régime spécial auquel l'intéressé pourrait prétendre.

Article 18. Détermination du degré d'invalidité

1. Pour évaluer la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations financières d'invalidité correspondantes, l'institution compétente de chacune des Parties contractantes effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.

2. Aux fins d'application du paragraphe précédent, les institutions compétentes de chacune des Parties contractantes prennent en considération les rapports médicaux et les données administratives fournis par les institutions de l'autre Partie contractante. Toutefois, chaque institution peut faire examiner l'assuré par un médecin de son choix et à ses frais.

Section 2. Application de la législation espagnole

Article 19. Assiette régulatrice des prestations financières

1. Pour établir l'assiette régulatrice des prestations financières, l'institution compétente ne prend en compte que les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.

2. Pour déterminer l'assiette régulatrice des prestations financières, les règles énumérées ci-dessous s'appliquent lorsque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 sont applicables :

a) le calcul de la pension théorique espagnole s'effectue sur la base des cotisations réelles versées en Espagne par l'assuré pendant les années précédant immédiatement le versement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole.

b) le montant de la pension est ensuite augmenté du montant des majorations et des revalorisations calculées pour chaque année postérieure, pour des pensions de même nature.

Section 3. Application de la législation de la République du Pérou

Article 20. Assiette régulatrice des prestations financières

1. Pour établir l'assiette régulatrice des prestations financières, l'institution compétente ne prend en compte que les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.

2. Pour déterminer l'assiette régulatrice des prestations financières, les règles énumérées ci-dessous s'appliquent lorsque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 sont applicables :

a) le calcul de la pension théorique péruvienne s'effectue sur la base des cotisations réelles versées au Pérou par l'assuré pendant les années précédant immédiatement le versement de la dernière cotisation à la sécurité sociale péruvienne.

b) le montant de la prestation financière est augmenté du montant des majorations des pensions de même nature.

Article 21. Régime de pensions privé

1. Les personnes affiliées à un régime de fonds de pension privé au Pérou financent leur retraite avec le solde cumulé sur leur compte individuel de capitalisation qui, le cas échéant, comprend les bons de reconnaissance accordés dans les conditions fixées par la législation péruvienne.

2. Nonobstant ce qui précède, lorsque ledit compte n'est pas suffisant pour financer une pension de retraite équivalente à un montant de pension prédéterminé tel qu'établi par la

législation péruvienne, la pension est fournie par l'État et les dispositions de l'article 13 du présent Accord s'appliquent.

3. Dans le cas des pensions d'invalidité, des pensions de réversion et des allocations obsèques, la pension ou la prestation correspondante est également financée par le solde cumulé sur le compte individuel de capitalisation, dans le cadre du modèle de gestion des risques applicable et conformément à la législation péruvienne.

4. En vue de déterminer les conditions et exigences en matière de reconnaissance et de versement des prestations susmentionnées, les dispositions de la législation péruvienne s'appliquent.

Chapitre 4. Allocations familiales pour les enfants à charge

Article 22. Reconnaissance du droit aux allocations familiales

1. Un travailleur assuré au titre de la législation d'une Partie contractante ou le titulaire d'une pension de l'une des Parties contractantes peut prétendre, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux allocations familiales prévues par la législation de la Partie dans laquelle il est assuré ou dans laquelle il bénéficie d'une pension, comme si les membres de sa famille résidaient sur le territoire de cette Partie contractante.

2. En cas de droit à des prestations pendant la même période et pour le même membre de la famille, en vertu de la législation des deux Parties contractantes, la responsabilité incombe à la Partie contractante où le travailleur est assuré ou en vertu de la législation de laquelle la pension est versée.

3. Si, nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, il subsiste un cumul de droits, les prestations sont versées uniquement par la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident les membres de la famille.

Chapitre 5. Prestations financières pour les accidents du travail et les maladies professionnelles

Article 23. Détermination du droit aux prestations financières

Le droit aux prestations résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est déterminé conformément à la législation de la Partie contractante à laquelle le travailleur est soumis à la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été contractée.

Article 24. Aggravation des séquelles d'un accident du travail

Si un travailleur victime d'un accident du travail subit une aggravation des séquelles de l'accident alors qu'il est soumis à la législation de l'autre Partie, les prestations financières auxquelles le travailleur a droit pour cette aggravation sont à la charge de l'institution compétente de la Partie contractante dans laquelle le travailleur était assuré au moment où l'accident du travail est survenu.

Article 25. Maladie professionnelle

1. Les prestations financières pour les maladies professionnelles sont déterminées conformément à la législation de la Partie contractante applicable au travailleur au moment où il exerçait l'activité comportant un risque de contracter cette maladie, quand bien même la maladie aurait été diagnostiquée pour la première fois pendant que le travailleur était soumis à la législation de l'autre Partie.

2. Lorsqu'un travailleur a exercé successivement ou alternativement cette activité alors qu'il était soumis aux législations des deux Parties contractantes, le droit à prestations est déterminé conformément à la législation de la Partie à laquelle le travailleur est ou a été soumis en dernier lieu en relation avec cette activité. Dans le cas où le travailleur ne peut pas bénéficier de prestations financières dans cette Partie contractante, les dispositions de la législation de la première Partie s'appliquent.

Article 26. Aggravation de la maladie professionnelle

1. Lorsqu'une prestation financière pour maladie professionnelle a été versée par l'une des Parties contractantes, la responsabilité de celle-ci est engagée en cas d'aggravation de la maladie même si le travailleur est soumis à la législation de l'autre Partie, à condition que le travailleur n'ait pas exercé une activité comportant le même risque alors qu'il était soumis à la législation de cette dernière.

2. Si, après s'être vu accorder une pension d'invalidité par l'institution d'une des Parties contractantes en raison d'une maladie professionnelle, le bénéficiaire exerce une activité susceptible d'aggraver la maladie professionnelle existante alors qu'il est soumis à la législation de l'autre Partie, l'institution compétente de la première Partie continue à verser la prestation initialement accordée sans tenir compte de l'aggravation et conformément aux dispositions de sa législation. L'institution compétente de la seconde Partie, à la législation de laquelle le bénéficiaire était soumis lorsque l'aggravation est survenue, accorde au bénéficiaire une prestation financière égale à la différence entre le montant de la prestation à laquelle le bénéficiaire a droit après l'aggravation et le montant de la prestation financière à laquelle le bénéficiaire aurait eu droit dans cette Partie avant l'aggravation.

Article 27. Prise en compte des séquelles d'accidents du travail et de maladies professionnelles antérieurs

Dans l'évaluation de la réduction de capacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est tenu compte des séquelles des accidents du travail ou des maladies professionnelles antérieurs dont le travailleur a pu souffrir, quand bien même ceux-ci seraient survenus alors qu'il était soumis à la législation de l'autre Partie contractante.

Chapitre VI. Allocations obsèques et indemnisation en cas de décès

Article 28. Allocations obsèques et capitaux décès

Les allocations obsèques et les capitaux décès sont régis par la législation de la Partie qui s'appliquait au travailleur à la date de son décès.

1. Dans le cas des pensionnés qui avaient droit aux prestations en application de la législation des deux Parties contractantes, la reconnaissance desdites prestations est régie par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résidait l'assuré.

2. Si le pensionné résidait dans un pays tiers, la législation qui s'applique, au cas où il aurait droit aux prestations dans les deux Parties contractantes, est celle de la Partie contractante où il était assuré pour la dernière fois.

Titre IV. Dispositions diverses, transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29. Pouvoirs et obligations des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes sont chargées de conclure les accords administratifs nécessaires à l'application du présent Accord.

2. Les autorités compétentes des deux Parties :

- a) désignent leurs organismes de liaison respectifs ;
- b) se communiquent les mesures adoptées au niveau national pour l'application du présent Accord ;
- c) se notifient toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui modifient celles visées à l'article 2 ;
- d) s'offrent mutuellement leurs bons offices et la plus large assistance technique et administrative possible pour l'application du présent Accord ;
- e) interprètent toute disposition de l'accord qui pourrait créer des incertitudes pour leurs institutions compétentes.

3. Une commission mixte, présidée par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, peut se réunir à la demande de l'une ou l'autre de ces autorités afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application du présent Accord et de l'accord administratif.

Article 30. Institutions compétentes du secteur privé ou soumises aux règles du droit privé au Pérou

L'application des dispositions du présent Accord concernant les institutions de sécurité sociale à financement individuel, les institutions compétentes du secteur privé et les institutions compétentes soumises aux règles du droit privé est réglée spécifiquement dans l'accord administratif prévu à l'article 29 du présent Accord.

Article 31. Présentation de documents

1. Les réclamations, avis, recours et autres documents qui, conformément à la législation d'une Partie contractante, doivent être soumis aux autorités ou institutions compétentes de cette Partie dans un délai déterminé, sont considérés comme ayant été soumis s'ils sont remis à l'autorité ou à l'institution compétente de l'autre Partie dans le même délai.

2. Toute demande de prestation présentée conformément à la législation d'une Partie contractante est considérée comme une demande de la prestation correspondante au titre de la législation de l'autre Partie, à condition que l'intéressé déclare expressément qu'il exerçait une activité professionnelle ou qu'il était assuré sur le territoire de ladite Partie, ou qu'il fournisse la documentation adéquate.

Article 32. Entraide administrative des institutions

1. Les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent, à tout moment, demander des examens médicaux et la vérification de faits et de documents pouvant entraîner l'obtention, la modification, la suspension, le retrait, l'annulation ou le maintien du droit aux prestations qu'elles accordent. Les frais qui en résultent sont remboursés sans délai par l'institution compétente qui a demandé l'examen ou la vérification, sur réception d'un relevé détaillé de ces frais.

2. L'institution compétente de l'une des Parties contractantes qui, en versant ou en révisant une prestation financière conformément aux dispositions du titre III du présent Accord, constate qu'elle a versé au bénéficiaire des prestations d'un montant supérieur au montant dû, peut demander à l'institution compétente de l'autre Partie qui doit verser des prestations financières de même nature au même bénéficiaire de retenir le montant du trop-perçu sur le premier paiement des arrrages sur les versements périodiques, dans les limites établies par la législation interne de la Partie qui réalise la retenue. Cette dernière institution transfère le montant retenu à l'institution créancière.

Article 33. Exemptions de droits d'actes et de documents administratifs

1. Les exemptions de droits d'enregistrement, d'actes, de timbre, de taxes consulaires ou autres droits similaires prévus par la législation des deux Parties contractantes sont étendues aux certificats et documents établis par les organismes ou les institutions compétents de l'autre Partie, en application du présent Accord.

2. Tous les actes administratifs et documents délivrés aux fins de l'application du présent Accord sont dispensés des obligations de légalisation.

Article 34. Actualisation ou revalorisation des prestations financières

Les prestations financières reconnues par application des dispositions du titre III du présent Accord sont actualisées ou revalorisées conformément à la législation interne de chacune des Parties contractantes et selon les dispositions de cet Accord.

Article 35. Conditions et garantie du versement des prestations financières

1. Les institutions compétentes de chacune des Parties contractantes sont réputées déchargées des paiements réalisés en vertu du présent Accord, lorsque ceux-ci sont effectués dans la monnaie ayant cours légal dans leur pays.

2. Si des dispositions restreignant le transfert de devises sont promulguées dans l'une quelconque des Parties contractantes, les deux Parties adoptent immédiatement les mesures nécessaires pour garantir l'exercice effectif des droits découlant du présent Accord.

Article 36. Règlement des différends

1. Tout différend se rapportant à l'interprétation du présent Accord et de son accord administratif est réglé par la voie de négociation entre les autorités compétentes.

2. Tout différend non résolu par la voie de négociation dans un délai de six mois à partir du début de celle-ci doit être soumis à une commission d'arbitrage, dont la composition et la procédure seront fixées d'un commun accord entre les Parties contractantes. Les décisions de la commission d'arbitrage sont contraignantes et définitives.

Chapitre 2. Dispositions transitoires

Article 37. Calcul des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de l'Accord

Les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties contractantes avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations et du montant de celles-ci, lesquelles sont reconnues en vertu de cet Accord.

Article 38. Événements antérieurs à l'entrée en vigueur de l'Accord

1. L'application du présent Accord ouvre le droit à des prestations pour des événements survenus avant son entrée en vigueur. Néanmoins, le versement de celles-ci ne s'effectuera en aucun cas pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur.

2. Les pensions ayant été versées par l'une ou les deux Parties contractantes, ou le droit à des pensions ayant été refusé avant l'entrée en vigueur de l'Accord, peuvent, à la demande des intéressés, être révisés en vertu du présent Accord et conformément à la procédure juridique établie par chaque Partie. Le droit est acquis à partir de la date de la demande, sauf disposition plus favorable de la législation de cette Partie.

Les prestations versées qui ont consisté en un montant unique ne sont pas révisées.

Chapitre 3. Dispositions finales

Article 39. Période de validité de l'Accord

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé totalement ou partiellement par notification de l'une des Parties contractantes à l'autre. En pareil cas, l'Accord cesse de produire ses effets six mois après notification de cette dénonciation.

2. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord demeurent applicables aux droits acquis en vertu de ce dernier. Les Parties contractantes conviennent des mesures garantissant les droits en cours d'acquisition découlant des périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle l'Accord prend fin.

Article 40. Cessation d'effet de l'Accord et de l'accord administratif entre le Pérou et l'Espagne

L'entrée en vigueur du présent Accord met fin à l'Accord sur la sécurité sociale entre les Gouvernements du Pérou et de l'Espagne, signé le 24 juillet 1964, et à l'accord administratif sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Pérou et le Royaume d'Espagne, signé le 24 novembre 1978, ainsi qu'à son accord complémentaire.

Le présent Accord garantit les droits acquis au titre de l'Accord du 24 juillet 1964, ainsi que de l'accord administratif du 24 novembre 1978 et de son accord complémentaire.

Article 41. Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la réception de la notification écrite par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des formalités réglementaires et constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des deux Parties contractantes ont signé le présent Accord.

FAIT à Madrid, le 16 juin 2003, en double exemplaire en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume d'Espagne :

ANA PALACIO

Ministre des affaires étrangères

Pour la République du Pérou :

ALLAN WAGNER

Ministre des affaires étrangères